


Asunto	Memoria justificativa sobre el cumplimiento de los principios de buena regulación
Documento	Memoria justificativa sobre el cumplimiento de los principios de buena regulación
Versión	V1
Fecha	La de la firma
Realizado	Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información



C./ Albert Einstein, nº4, Edif. World Trade Center,
 Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla

Código Seguro de verificación: o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MANUEL ORTIGOSA BRUN		FECHA	30/05/2018
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==	PÁGINA	1/5
				
o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==				

La presente Memoria se redacta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El citado artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige que las Administraciones Públicas actúen en sus iniciativas legislativas de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, simplicidad y eficiencia.

En esta memoria se resume la adecuación a los citados principios del proyecto de Orden de XX de XXX de 201X, por el que se establecen las bases reguladoras para el procedimiento de selección de los ayuntamientos participantes en la primera convocatoria del Programa de Impulso al Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía.

1. Principios de necesidad y eficacia.

En este sentido es necesario argumentar que según el artículo 129.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución”. La necesidad exige que la iniciativa legislativa esté justificada por una razón de interés general. La promulgación de este proyecto de Orden resulta imprescindible, pues debe establecer el marco regulador que permitirá la selección de proyectos e iniciativas municipales de desarrollo de ciudades inteligentes que se muevan por objetivos de “ahorro y la mejora de eficiencia en la gestión, prestación y accesibilidad a los servicios públicos”, “fomento de la innovación”, “promoción de la transparencia y la apertura de datos públicos”, o “fomento de la interoperabilidad de servicios interadministrativos” planificadas en el objetivo específico OE.2.3.1 del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 “ *Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e- aprendizaje, e-inclusión y e-salud*”.


Dichas operaciones permitirán facilitar el cumplimiento de los objetivos definidos en materia de ciudades inteligentes en la Agenda Digital para Europa trasladados posteriormente a la Agenda Digital para España y el Plan de Acción AndalucíaSmart 2020.

El principio de necesidad está íntimamente relacionado con el principio de eficacia, con antecedentes en la Ley de Contratos del Sector Público, cuando señala: “Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales” (art. 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). Así, estos principios tienen mucho sentido en la moderna gestión pública, en la que se debe prescindir de medidas innecesarias. La aplicación de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para el



C./ Albert Einstein, nº4, Edif. World Trade Center,
 Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla

Código Seguro de verificación: o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MANUEL ORTIGOSA BRUN		FECHA	30/05/2018
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==	PÁGINA	2/5
				
o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==				

procedimiento de selección de los ayuntamientos participantes en la primera convocatoria del Programa de Impulso al Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía, permitirá establecer el marco regulador para la ejecución de proyectos que potencien el empleo de las TIC para el desarrollo de ciudades e infraestructuras urbanas inteligentes, contribuyendo al desarrollo de la economía de aquellas ciudades y municipios de Andalucía con población inferior a 20.000 habitantes donde no actúan otros programas operativos de carácter plurirregional que fomentan el desarrollo de ciudades inteligentes.

2. Principio de proporcionalidad.

El artículo 129. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, alude respeto al principio de proporcionalidad:

“En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios”.

Este principio exige que la propuesta normativa sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue. En nuestro caso, la aprobación de la Orden descrita permitirá establecer las bases reguladoras para seleccionar los ayuntamientos que participarán en el Programa de Impulso al Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía. El procedimiento de selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva, estando fijado el plazo máximo para resolver en seis meses, en virtud de lo dispuesto en la citada Orden.

El principio de proporcionalidad igualmente está relacionado con el principio de necesidad, en el sentido de que el régimen jurídico que se establezca siempre debe ser el menos gravoso para los interesados. La orden establece un procedimiento general al que deberán adaptarse las futuras convocatorias. En las citadas convocatorias se establecerán unos formularios normalizados para la ejecución de los respectivos trámites por parte de los interesados.


3. Principio de seguridad jurídica.

Según el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su



C./ Albert Einstein, nº4, Edif. World Trade Center,
 Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla

Código Seguro de verificación: o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MANUEL ORTIGOSA BRUN		FECHA	30/05/2018
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==	PÁGINA	3/5
				
o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==				

conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.”

El principio de seguridad jurídica exige que la iniciativa normativa se ejerza de manera coherente con el resto del Ordenamiento Jurídico para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación de la ciudadanía. El proyecto de referencia se enmarca adecuadamente en el ordenamiento jurídico, ya que sus preceptos se desarrollan dentro del marco definido por la normativa europea relativa a la aplicación de fondos FEDER, así como a la normativa específica de contratación y otras normativas, tanto nacionales como autonómicas, de aplicación. Todo el marco jurídico de aplicación se encuentra recogido en el régimen jurídico especificado en el articulado de las bases reguladoras. Con todo ello se genera un marco normativo estable y predecible para los interesados, el órgano gestor de las actuaciones y cualquier otro colectivo que pudiera verse afectado.

4. Principio de transparencia.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 129.5, “En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.”

Este principio exige que los objetivos del proyecto y su justificación deban ser definidos claramente. El objetivo de la regulación de este proyecto es nítido y los motivos de la misma igualmente claros. En este sentido y en base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece con carácter previo a la elaboración de un reglamento se sustanciará consulta pública, a través del portal Web de la Administración competente en la que se recabará opinión de los sujetos y organizaciones más representativas afectados por la futura norma. Así, en virtud de lo dispuesto en dicho artículo según dispone el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2016 por el que se adoptan medidas para habilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración normativa a través del portal de la Junta de Andalucía, en el mes de mayo de 2018 se sometió a Consulta Pública Previa la medida prevista y sus aspectos más relevantes, concretada inicialmente en la elaboración de las bases reguladoras objeto de este expediente. El objetivo de esta consulta era recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones más representativas, potencialmente afectados, antes de la elaboración del proyecto de Orden previsto. No se recibieron aportaciones en el plazo establecido.



C./ Albert Einstein, nº4, Edif. World Trade Center,
 Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla

Código Seguro de verificación: o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MANUEL ORTIGOSA BRUN		FECHA	30/05/2018
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==	PÁGINA	4/5



o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==

5. Principio de eficiencia.

Por último la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 129.6, “En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos”.


Según este principio, las propuestas normativas deben partir de una identificación clara de los fines perseguidos, lo que se cumple en este proyecto con unos objetivos marcados muy definidos establecidos en el Programa Operativo FEDER en el que se encuadran las actuaciones previstas. Así mismo se evitarán cargas innecesarias y accesorias para la consecución de estos objetivos finales, aspecto que se ha puesto en práctica en este proyecto estableciendo un procedimiento sujeto a la normativa vigente que sólo introduce las cargas administrativas requeridas por ésta.

EL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



C./ Albert Einstein, nº4, Edif. World Trade Center,
 Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla

Código Seguro de verificación: o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MANUEL ORTIGOSA BRUN		FECHA	30/05/2018
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==	PÁGINA	5/5
				
o15S/LE95+164mLUIf jAnQ==				